

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 177

FECHA: 30 de Septiembre de 2013

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
AMÉRICA LATINA	MILITARES NORTEAMERICANOS EN LATINOAMÉRICA: UNA PRESENCIA EN AUMENTO	2
BOLIVIA	EVO MORALES PROPONE EN LA ONU JUZGAR A OBAMA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD	3
	LA CIA DETRÁS DE QUINTANA PARA AFECTAR A EVO MORALES	3
COLOMBIA	LA MUERTE POLÍTICA DE SANTOS	7
	LA REBELIÓN DE LOS "ENRUANADOS"	8
EL SALVADOR	EL SALVADOR MIRA A LAS URNAS. BALANCE DEL GOBIERNO FUNES-FMLN ANTE LAS PRESIDENCIALES DE 2014	11
GUATEMALA	CASO 118/2012: ACOSO Y DERRIBO A LA JUSTICIA	14
HAÍTÍ	EL COMBATE AL CÓLERA CHOCA CON LA FALTA DE DINERO EN HAÍTÍ	16
HONDURAS	¡DEFENDAMOS LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA!	18
MÉXICO	LA RECONFIGURACIÓN DEL AUTORITARISMO Y EL CONFLICTO MAGISTERIAL	19
NICARAGUA	ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA PADRE TEO KLOMBERG	20
PANAMÁ	EL EFECTO ESPEJO EN PANAMÁ	21

AMÉRICA LATINA

MILITARES NORTEAMERICANOS EN LATINOAMÉRICA: UNA PRESENCIA EN AUMENTO

Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos están presentes cada vez más en América Latina para tareas de capacitación y de recaudación de inteligencia y otras misiones militares que, con otros programas de asistencia estadounidense a la región, se realizan bajo el rubro del viejo esquema de la lucha antinarcoóticos, a pesar de los llamados por un cambio en las políticas antinarcoóticos, concluye un nuevo informe sobre la asistencia de seguridad estadounidense en el hemisferio.

El informe publicado hoy por tres centros de investigación y análisis –Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Centro para políticas Internacionales (CIP) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que mantienen un banco de datos conjunto sobre programas de asistencia estadounidense a América Latina– registra que aunque el nivel de asistencia estadounidense se ha reducido a uno de los más bajos en una década, lo preocupante es un mayor énfasis en relaciones militares menos transparentes y la sordera ante el creciente coro a favor de repensar las políticas prohibicionistas sobre las drogas por todo el hemisferio.

En gran medida, lo que viene ocurriendo no se refleja en los grandes presupuestos, sino que bien encubierto por un velo de misterio, deslucidos informes ante el Congreso y el público, y una migración del manejo de programas el Departamento de Estado hacia el Departamento de Defensa, subraya el informe, Hora de escuchar: tendencias en asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

Más aún, el informe indica que a lo largo de los últimos años Estados Unidos ha ampliado su participación directa en operaciones antidrogas en el hemisferio occidental, sobre todo en América Central.

El informe destaca que, como en casi todo rubro, el gobierno de Barack Obama ha favorecido el empleo de Fuerzas de Operaciones Especiales en sus políticas de seguridad, y que serán cada vez más empleadas en América Latina para capacitación y organizar ejércitos. Tales misiones cumplen funciones que van más allá de la mera provisión de entrenamiento. Ellas permiten que las unidades de Fuerzas Especiales se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales claves en países donde algún día podrían operar, indica el informe. Agrega que también permiten que el personal estadounidense reúna información confidencial sobre sus países anfitriones.

También hay programas para establecer más unidades militares y policiales especializadas y otras fuerzas de élite que son capacitadas y operan con la supervisión de Estados Unidos y se vuelven un mecanismo de bajo costo para mantener la presencia e influencia de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, sostiene el informe. Además hay otros equipos, como las Unidades de Investigación Confidencial o SIU, grupos ultrasecretos de agentes élite de la región bajo supervisión de la DEA y la CIA, operando en varios países, incluyendo recientemente México. De hecho, la DEA cuenta con más oficiales en México que en cualquiera de sus otros puestos en el extranjero.

El informe también destaca el papel cada vez más amplio de Colombia en la capacitación y asistencia, así como la exportación de su modelo, a otros países latinoamericanos en el contexto de la lucha antinarcoóticos, incluido México, donde Colombia ha participado en la capacitación de miles de policías mexicanos.

FRACASOS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

A la vez, indica que a más de 40 años de la declaración de la guerra contra las drogas, con sus fracasos empíricos (desde 2000, por ejemplo, Washington ha gastado aproximadamente 12 mil 500 millones de dólares en América Latina en programas antinarcoóticos con resultados mínimos), prominentes voces tanto de la sociedad civil como gobernantes a favor de replantear la estrategia antinarcoóticos y considerar alternativas están ganando cada vez más impulso en la región, algo que Washington continúa ignorando. “Tenemos un pedido primordial para nuestro gobierno: es hora de escuchar... de escuchar la invocación a nuevas políticas sobre drogas para nosotros y para la región”, subraya el documento.

El informe también incluye datos por región y países de la asistencia militar y policial estadounidense a América Latina y el Caribe desde 1996 a la programada para 2014. México recibió 44.8 millones en 2006, cifra que se multiplicó más de 10 veces para alcanzar 508 millones en 2010, 166 millones en 2012, 154 en 2013 y 127 millones en 2014.

Fuente: La Jornada

BOLIVIA

EVO MORALES PROPONE EN LA ONU JUZGAR A OBAMA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Evo Morales, presidente de Bolivia, propuso la creación de un “tribunal de los pueblos” para juzgar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por “delitos de lesa humanidad”, al hacer uso de la palabra este miércoles en Naciones Unidas.

“Ya que estamos aquí debatiendo sobre la vida y la humanidad, quiero plantearles un tribunal de los pueblos para empezar una demanda al Gobierno de Obama”, dijo Morales durante su intervención en la 68 Asamblea General de la ONU, en la que criticó la política internacional norteamericana.

“Estados Unidos es el albergue de corruptos, terroristas y delincuentes. Hay que pensar en cambiar la sede de las Naciones Unidas”, propuso Morales, subrayando que el presidente norteamericano, Barack Obama, “ganó el Premio Nobel de la Paz, no el premio de la guerra”.

¿Quiénes se benefician de las guerras? ¿En manos de quién quedan los países luego de las intervenciones? ¿Quiénes manejan sus riquezas?”, se preguntó el presidente boliviano y subrayó que “Las democracias no hacen las guerras”.

“Estados Unidos viola los derechos humanos con sus sistemas de espionaje en países antiimperialistas y en aliados. Se nos habla sobre los derechos humanos cuando se tortura a la gente en Guantánamo”, dijo.

“El terrorismo se combate con política social, no con bases militares”, declaró Morales.

“Me he sentido inseguro al visitar la ONU en Nueva York. [...] Para venir acá, Estados Unidos me dio una visa por seis días”, denunció.

Durante su discurso el presidente boliviano destacó el mejoramiento de la economía del país. “Hemos cumplido con la reducción de la extrema pobreza y la pobreza. Un millón de habitantes de los 10 millones que hay en Bolivia han pasado a la clase media”, reveló Evo Morales.

“Bolivia es un Estado digno y soberano. Antes políticamente estuvimos sometidos al imperio norteamericano, ahora nos hemos liberado. Después que nacionalizamos los hidrocarburos comenzamos a mejorar”, dijo.

“La renta petrolera de Bolivia será de 5.000 millones de dólares”.

Fuente: Cubadebate

LA CIA DETRÁS DE QUINTANA PARA AFECTAR A EVO MORALES

Ante la imposibilidad de rebatir los éxitos de la gestión del presidente Evo Morales, una campaña organizada por la CIA busca, en una nueva fase de su aplicación, enlodar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por su presunta relación con el narcotráfico y así afectar la imagen del proceso boliviano. Para ello se sirve del sicariato madiático.

Una campaña, organizada por la CIA y ejecutada a instancias de la DEA, se encuentra en marcha para levantar una ola de sospechas contra el gobierno boliviano por su presunta relación con el narcotráfico. Para ello usan palabras presuntuosas como narcoestado, estado fallido o tiranía cocallera. La puerta de entrada, en esta nueva fase, es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien incomoda a Washington por sus recurrentes posiciones radicales contra la presencia estadounidense en Bolivia. Hasta hoy no se ha desmentido categóricamente y con datos al Ministro Quintana sobre la denuncias que él hizo. En todo caso para minimizar y lateralizar los

cuestionamientos del ministro algunos medios y periodistas suelen apelar a los argumentos provistos por la embajada de los EUU

En realidad se trata de la segunda fase de una campaña que se activó a principios de año, cuando una articulación de la CIA y la DEA concentró sus esfuerzos para elaborar un expediente contra el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, y afectar, de esa manera, la imagen del presidente Evo Morales, quien irá a la reelección en 2014.

Una investigación de Jaime Salvatierra publicada por La Época en tres partes entre mayo y junio da cuenta, con nombres y apellidos, así como de circunstancias, del ingreso encubierto de dos agentes de la DEA desde Panamá y la colaboración de otros dos agentes CIA radicados en Santa Cruz, para participar en calidad de instructores de un curso organizado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en la ciudad oriental.

La denuncia, en la que en su tercera publicación brinda la identidad de otros agentes CIA, no fue negada por la embajada de Estados Unidos en La Paz. Eso sí, provocó ira. El encargado de Negocios, Larry Memmot, solo se limitó a dos cosas: primero a decir al periódico Cambio que se trataba de dos expertos en seguridad contratados a través de una empresa a la que la FELCN le pidió colaboración por vía de la NAS y, segundo, a quejarse ante la Cancillería boliviana porque la nota fue reproducida por el órgano estatal.

Nueva fase

La nueva fase de esta campaña se inició el 23 de agosto pasado, cuando el ex prefecto y senador por el departamento de Pando, Roger Pinto, en su tercer intento fugó del país hacia el Brasil con la colaboración del encargado de Negocios de ese país, Eduardo Saboia, un diplomático reclutado por la inteligencia estadounidense cuando cumplía misión en Washington. No hay que olvidar que entre Saboia el exembajador brasileño, Marcel Biato, el senador Ferraco y los agentes norteamericanos en La Paz existe un cálido romance ideológico antipopular precedido de sus militancias religiosas radicales .

El diplomático brasileño jugó desde el principio un papel activo en el caso Pinto, tanto para que se le abriera las puertas como para que saliera ilegalmente en agosto de este año. Saboia es quien le organizó a Pinto múltiples reuniones con el encargado de Negocios de EEUU, Larry Memmot, como la registrada a poco de arribar a Bolivia el 24 de julio de 2012.

El blanco de la campaña de la CIA es el ministro Juan Ramón Quintana. Si bien su nombre aparece ya mencionado en la publicación de la Revista Veja del Brasil en julio de 2012, en la que se habla de "la república de la cocaína", es ahora que cobra importancia por dos razones: por un lado, por su presunta relación con el coronel Fabricio Ormachea, quien está detenido en Miami por pretender chantajear al empresario boliviano Humberto Roca, dueño de la quebrada línea aérea Aerosur que fugó dejando una deuda millonaria al Estado. Y, por otra parte, por las declaraciones de Pinto en Brasil, donde a pocos días de haber ingresado ratificó las "relaciones peligrosas" entre personalidades del gobierno de Evo Morales y el narcotráfico.

Nada más que un apunte sobre la publicación de Veja. El periodista Duda Teixeira relata en su artículo titulado "La república de la cocaína", sobre la base de un presunto informe de la inteligencia policial boliviana, de una reunión del Ministro y la ex candidata a la gobernación Jessica Jordán con el narcotraficante Maximiliano Dorado, en un barrio de la oriental ciudad de Santa Cruz.

Varios medios de comunicación bolivianos hicieron eco de la denuncia, pero no le dieron similar cobertura cuando la propia revista brasileña ingresó en contradicciones sobre la fecha de la supuesta reunión. Primero dijo que era el 18 de octubre de 2010 y luego un mes después.

¿Por qué Quintana?

La nueva fase de la campaña contra el gobierno de Bolivia por su presunta relación con el narcotráfico, una matriz de opinión que la oposición busca posicionar, encuentra al Ministro de la Presidencia el blanco perfecto para afectar, como fin último, al presidente Evo Morales.

Quizá Duda Teixeira, de la revista Veja, ayuda a comprender una de las razones. Al referirse a Quintana dice: “Es autor de las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales” y se le atribuye directamente “la sugerencia” de expulsar a la DEA en 2008.

Es evidente que Quintana incomoda a los Estados Unidos por su posición antiimperial dado su conocimiento académico sobre el triste historial en la construcción extraterritorial de los EEUU y su dominio violento contra el mundo. La incomodidad gringa proviene también porque se acusa a Quintana de romper los vínculos orgánicos y la dependencia que mantenía la embajada gringa respecto a las FFAA y la Policía Boliviana. Está claro que perder el control de los aparatos de seguridad bolivianos para la embajada gringa fue traumático porque impide prosperar todo proyecto conspirativo desde las filas uniformadas.

Su papel de primer orden para frenar el golpe “cívico-prefectural” de 2008, particularmente al evitar que la ultraderecha tome territorialmente Pando luego de la masacre del Porvenir, así como su incansable denuncia de los planes subversivos de USAID y los organismos de inteligencia estadounidenses lo han convertido en el objetivo a destruir.

A eso se suma que Quintana al igual que Cáceres, es un hombre de confianza de Morales y al levantar sospechas sobre él se intenta afectar la imagen del primer presidente indígena de Bolivia, quien es el objetivo principal de la campaña estadounidense.

Brasil, la fábrica de pruebas

De acuerdo a la información a la que se tuvo acceso, la redoblada presencia de la CIA y la DEA en Brasil han convertido a ese país en una “fábrica de pruebas documentales” en contra del ministro Quintana y con la clara intención de debilitar la imagen del presidente Evo Morales, quien se dispone a participar en las elecciones de 2014.

De hecho, la intensidad de la campaña mediática contra el hombre fuerte del gobierno boliviano se irá intensificando en la medida que se acerquen las elecciones generales. Esto se explica porque uno de los objetivos es tratar de que Morales, quien no baja del 59 por ciento de respaldo desde hace ocho meses, no gane por un alto porcentaje. La oposición está resignada a perder, unida o dispersa, y lo que busca es que el MAS no obtenga de nuevo dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No hay que olvidar que la gestión política de Quintana desde el 2008 le privó a la derecha boliviana separatista de seguir gozando del apoyo del departamento de Pando, un argumento más para satanizar su trabajo gubernamental.

También figura entre los hilos de la campaña el involucrar a altos personeros del gobierno en una supuesta red de abogados que le brindan apoyo a los narcotraficantes brasileños.

Los agentes CIA en Brasil, “disfrazados de diplomáticos” según da cuenta una publicación del diario Folha de Sao Paulo el 16 de septiembre, se encuentran trabajando arduamente en coordinación con sus pares de Bolivia, Perú y Paraguay para apoyar la operación.

La instrucción de los agentes estadounidenses a sus “leales” dentro de la Policía Federal del Brasil es recolectar toda la información que se pueda para engrosar el expediente contra el Ministro de la Presidencia de Bolivia, para lo que en los últimos días se ha trasladado hasta Brasilia el jefe Regional de la DEA con el objetivo de tomar contacto con Pinto y hacer ajustes sobre su papel en la campaña internacional. Conviene recordar al público que la salida de la DEA de Bolivia permitió conocer que Santa Cruz se había convertido en el centro de operaciones de la DEA para América del Sur y que al salir la DEA de Bolivia obligó a dismantelar todo el aparato de seguridad que los gringos instalaron en nuestro país para controlar el comportamiento político de la región. Golpe por cierto demoledor que la DEA no le perdona a Quintana y tampoco a Evo.

No obstante, desde Bolivia varios agentes de los servicios secretos estadounidenses están viajando hasta Perú, Paraguay y Brasil con el mismo propósito. Lo hacen generalmente por tierra para no llamar mucho la atención de la oficina de Migración en los aeropuertos y aprovechando las limitaciones que existen para un adecuado control en las fronteras.

Veamos algunos ejemplos:

Alton Eugene Dawsey, salió el 14 de junio y regreso el 17 de junio.

Gregory Reynolds Alston, salió el 22 de junio y regresó el 4 de julio.

Richmond Paul Blake, salió el 22 de mayo y regresó el 3 de junio.

Alejandro Lee Johson salió el 27 de junio y regresó el 5 de julio. El mismo regresó el 20 de agosto, aunque no hay señales del día en que volvió a cruzar la frontera.

Donald Loren Frerichs, salió el 30 de mayo y regresó el 4 de agosto.

Geofrey Frederich Schadrak, salió el 19 de julio y regresó el 6 de agosto.

De todos ellos, el último es el jefe de la estación CIA en Bolivia y el responsable de la campaña contra el gobierno boliviano.

Los operadores de la campaña son varios y no necesariamente tienen relación directa entre ellos.

Entre los políticos bolivianos, cuya relación con la derecha brasileña, colombiana y venezolana es bastante estrecha, figuran los parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) Adrián Oliva y Norma Piérola y otros, quienes junto a Pinto gozan de la confianza de la inteligencia estadounidense. De hecho, el agregado militar, Tcnl Patrick Mathes, un predilecto oficial de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) y colaborador de la CIA, se reunía con los tres políticos de manera permanente, particularmente en el Hotel Camino Real de la zona sur de La Paz, según da cuenta el investigador ruso Nil Nikandrov a fines de 2012.

El investigador ruso sostiene textualmente que “El director de misiones de la USAID en Bolivia, Wayne Nilsestuen y su equipo consiste en operativos de la CIA que trabajan bajo cobertura diplomática. La estación de la CIA en Bolivia existe bajo la fachada del departamento político de la embajada. Las verdaderas actividades del personal de este departamento no son ningún secreto para el servicio de contra-espionaje de Bolivia. Geoffrey Schadrack es el residente de la CIA y sus subordinados Roberto Crotty, Eric Whittington, Richmond Blake, Eric Camus y otros, la mayoría bastante jóvenes....”

De todos los mencionados por la publicación del euroasiático, Whittington se marchó el 26 de junio y Roberto Crotty el 31 de julio, después de haber quedado al descubierto por las publicaciones de La Época.

Al destaparse la actividad de la inteligencia estadounidense en La Paz, Mathes abandonó también Bolivia y lo sustituye en sus funciones Dennis Fiemeyer, quien trabajó antes en Paraguay.

Un segundo nivel de operadores está conformado por algunos miembros de la Policía Federal del Brasil, que está archivando toda la información de la DEA contra Bolivia y operando con la CIA a espaldas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

De hecho, dos policías encubiertos de Brasil, cuya identidad está en investigación, fueron destacados en los últimos tiempos a una unidad de la FELCN de Santa Cruz, respaldados en su trabajo por aparatos de escucha.

El uso que la CIA y la DEA hacen de la Policía Federal del Brasil se ha intensificado luego del convenio antidrogas firmado en 2010, bajo el argumento de la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. La CIA está presente en la mayor parte de las bases de la policía federal en todo el país y “lo que más hay es americano transvestido de diplomático haciendo investigaciones en Brasil”, afirma el director de la Federación Nacional de Policías Federales (Fenapef), Alexandre Ferreira al diario Folha de Sao Paulo.

Un tercer nivel de operadores está integrado por periodistas que tributan información a la revista Veja y a la cadena Univisión de Miami. Estamos hablando de Douglas Farah, Duda Teixeira y Emilio Martínez en el caso de la primera, y Gerardo Reyes y Casto Ocando para la segunda.

La relación de estos periodistas con los servicios secretos estadounidenses es de años. Douglas Farah, que según la propia revista Veja “dirige informes de seguridad para empresas privadas y órganos del gobierno americano”, es un periodista “asesor en seguridad nacional” que hace poco dijo: “los niveles de complicidad de las autoridades de Bolivia con los carteles internacionales de la droga no son ajenos al gobierno de Estados Unidos”.

Las relaciones de Farah con la ultraderecha boliviana son bastante estrechas y es una de las fuentes más importantes para la revista Veja en su ataque al gobierno boliviano. Como parte de esa relación el periodista se encargó de garantizar a la hija de Roger Pinto ante el consulado estadounidense para que viaje en calidad de turista en febrero de 2009.

Emilio Martínez es un periodista uruguayo que reside en Bolivia desde hace muchos años y en sus publicaciones, artículos y un par de libros, acusa al gobierno de Morales por su relación con el narcotráfico y descalifica el operativo de abril de 2009, cuando los órganos de seguridad desmontaron una banda de sicarios extranjeros encabezados por el croata Eduardo Rózsa.

De los otros mencionados, en los últimos días se ha mostrado muy activo el periodista Gerardo Reyes de Univisión de Miami. Tras la detención del policía Fabricio Ormachea en Estados Unidos, ha señalado que se trata del “principal operador político de Juan Ramón Quintana dentro de la Policía Boliviana” y además dice que ese policía, designado en 2009 como jefe de operativos de la FELCN, “respondía directamente” al actual Ministro de la Presidencia.

En fin, ante la imposibilidad de contar con armas legítimas para enfrentar a Evo Morales, la CIA está en plena campaña internacional para desacreditar el proceso boliviano. Para hacerlo más creíble y ocultar su verdadero objetivo, ha encontrado en Quintana a su blanco al cual atacar. Queda claro entonces que la derecha boliviana tiene una vez más a la CIA y a la DEA como a sus grandes operadores políticos en tiempo de vacancia intelectual y carencia de programa político. De eso trata el imperio, de hacer el trabajo de sus lacayos ideológicos criollos.

Fuente: Ernesto Sánchez. La Epoca / Rebelión

COLOMBIA

LA MUERTE POLÍTICA DE SANTOS

En Colombia es muy común escuchar que con determinada decisión judicial o disciplinaria se declara la muerte política de un ciudadano o ciudadana cualquiera, como consecuencia de haber cometido un delito de orden penal. Seguramente, la ley de este país está repitiendo normas de otros estados.

También ocurre tal cosa cuando una persona es objeto de repudio entre los electores de un proceso para escoger un cargo de origen popular. Más recientemente las encuestas y sondeos de opinión están indicando cuál es la situación de algunas personas que tienen reconocimiento social y público.

Bien se puede afirmar que cuando las tendencias de una pesquisa arrojan como resultado el descenso en la aprobación de un personaje, este va entrando en los laberintos de lo inexistente e irrelevante para el resto de los integrantes de la sociedad.

En América Latina, los casos del Perú, con Alejandro Toledo y de Chile, con Sebastian Piñera, son muy reveladores. Toledo fue un fiasco y su caída espectacular en la aceptación ciudadana marcó su destino político en el ostracismo. Piñera condujo, por fortuna, a la ruina de la derecha recalcitrante pinochetista dando paso, de nuevo, a la concertación que lidera la señora Bachelet.

En las mismas está el señor Juan Manuel Santos. En encuesta tras encuesta, desde hace más de un año, el registro es su caída sostenida en los niveles de aceptación entre las mayorías de la sociedad.

Este 28 de septiembre se dio a conocer un sondeo de la empresa IPSOS, y 77 de cada 100 personas rechaza su gestión, manifestando, además, su oposición a la reelección por otros cuatro años más. Una situación nada nueva pero que el reciente paro agrario, violentado y ultrajado por los cuerpos policiales del dueño de la Casa de Nariño, consolidó como reflejo de la profunda crisis política que vive la sociedad colombiana.

Santos ya vive su muerte política. Es un cadáver que requiere sepultura. Esa realidad no la quieren admitir en la Presidencia de la República y en la Unidad Nacional santista, y andan con el cuento de

un repunte milagroso en los próximos meses, merced a los resultados que se verán en varios frentes de la gestión gubernamental. Puro artificio de demagogos.

Colombia está inmersa en un gran vacío político y los grupos populares mayoritarios, que emergieron con las recientes protestas sociales, están llamados a jugar un papel central en la búsqueda de alternativas democráticas y revolucionarias que instalen un poder diferente al viejo dominio de la oligarquía feudal y financiera que controla la maquinaria gubernamental.

Parte de una nueva infraestructura política democrática es la superación del conflicto armado y la construcción de una paz con justicia social. Tarea que un muerto político no puede realizar.

[Horacio Duque Giraldo-Rebelión](#)

LA REBELIÓN DE LOS "ENRUANADOS"

El 19 de agosto se inició un paro agrario que con el paso de los días se convirtió en la protesta social más importante que se ha llevado a cabo en Colombia en las últimas décadas. Entre los elementos más destacados de esta movilización se encuentra la participación activa de campesinos de Boyacá, cuyo elemento más representativo es la ruana, una prenda de vieja usanza que abriga a hombres y mujeres de las tierras frías y templadas de la campiña boyacense. Aunque en este paro han participado campesinos de otras latitudes del territorio colombiano, por la importancia simbólica de la ruana, puede decirse que hemos presenciado la rebelión de los *enruanados*.

LOS MOTIVOS

Los motivos para que la población colombiana proteste son tan amplios que uno debería preguntarse no por qué protesta la gente, sino más bien por qué protesta tan poco. En todo el territorio colombiano, pero en especial en el mundo agrario, se acumulan agravios e injusticias centenarias que ayudan a explicar la rabia popular que estalló durante el paro. Las humillaciones que soportan los campesinos, los motivos, pueden ser analizados en tres temporalidades diferentes: en el largo, mediano y corto plazo.

Largo plazo

Durante los últimos doscientos años, tras la independencia de España, en lo que hoy es Colombia se consolidó un modelo agrícola basado en el latifundio y el poder de los terratenientes, a costa de la expropiación violenta de las tierras que pertenecían a las comunidades indígenas y a los campesinos. Algunos de estos sectores fueron arrinconando en minifundios y otros fueron expulsados violentamente de sus tierras y se vieron obligados a colonizar las tierras baldías, las que luego también fueron acaparadas por los terratenientes. Desde el punto de vista político, los campesinos fueron convertidos en carne de urna para legitimar a los gamonales de uno u otro partido, o en carne de cañón como reclutas de los ejércitos partidistas en las innumerables contiendas civiles del siglo XIX y durante la época de la Violencia desde mediados de la década de 1940.

Cualquier intento de reforma agraria ha sido aplastado mediante la violencia terrateniente contra los campesinos. Sus organizaciones han sido destruidas, sus líderes perseguidos y asesinados y a los campesinos se les ha mantenido como clientela política del bipartidismo.

En el largo plazo se observa una concentración de la propiedad, poca participación política del campesinado, desigual tributación como expresión de la diferenciación de clase, un gran poder de parte de latifundistas y ganaderos y, en general, una tremenda injusticia.

De aquí emergen unas reivindicaciones históricas de los campesinos encaminadas a que se efectúen reformas estructurales, de fondo, en cuanto a la redistribución de la propiedad, democratización de la vida en el campo y solución a los problemas acumulados de pobreza y desigualdad.

Mediano plazo

Más cerca del momento actual, en 1972 se selló el Pacto de Chicoral, con el cual se liquidó cualquier intento de Reforma Agraria en el país, se institucionalizó la ganadería extensiva como forma de explotar la tierra, y se divide al movimiento campesino, con la creación de la Línea Armenia de la

ANUC. A pesar de todo, los campesinos libran importantes luchas por la tierra en varias regiones del país. Como respuesta, los terratenientes organizaron ejércitos paramilitares desde comienzos de la década de 1980, que han masacrado a colonos y campesinos en un cortejo de sangre que se prolonga hasta la actualidad, y detrás del cual se dibuja una reconcentración de tierras, como parte de una anti-reforma agraria, en manos de los viejos y los nuevos latifundistas, asociados con el narcotráfico.

En esta fase de mediano plazo sobresale la apertura económica, convertida en política oficial del gobierno neoliberal de César Gaviria Trujillo (1990-1994), cuyo lema “bienvenidos al futuro” representó la entrada del país en el libre comercio, que golpeó a toda la economía colombiana, pero que ha tenido un impacto nefasto en el campo, puesto que destruyó importantes renglones de la actividad productiva –entre ellos el café-, desprotegió a la economía campesina y propició la llegada de capital y productos provenientes del mercado mundial que arrasaron con la producción local.

Ante la crisis de la producción campesina tradicional, se consolidaron en varias regiones de la geografía nacional los mal llamados “cultivos ilícitos”, a cuya siembra se han dedicado campesinos y colonos como único medio de supervivencia, con lo que se configura un nuevo sector de campesinos y colonos, que soportan la “guerra contra las drogas”, con la represión y despojo que la acompañan.

Por estas razones, y considerando los diferentes sectores sociales del campo, emergen reivindicaciones diversas, entre ellas las de las denominadas “dignidades agrarias” que se centran en la defensa de la producción nacional y mejores precios. Por su parte, un sector ligado a los colonos exige la legalización de los títulos, la adjudicación de zonas de reserva campesina, la sustitución de cultivos de hoja de coca y el impulso de obras de infraestructura. Esos campesinos se encuentran en las zonas donde tradicionalmente ha hecho presencia la guerrilla.

Corto plazo

La apertura económica fue el primer paso de la estrategia de libre comercio, que se ha ratificado en los últimos años con la aprobación de catorce Tratados, entre los cuales sobresale el que se firmó con los Estados Unidos. Como resultado de estos acuerdos aumentó la cantidad de productos alimenticios procedentes del imperio del norte y de la Unión Europea –cuyos productores cuentan con cuantiosos subsidios-, lo que ha perjudicado en forma negativa a arroceros, lecheros, paperos, avicultores y a productores de maíz y diversos granos. Durante el primer año de funcionamiento del TLC, las importaciones de alimentos que provienen de Estados Unidos aumentaron en un 81%, con menores costos que los de la producción local, con lo que han caído los ingresos de los hogares campesinos. Al mismo tiempo, se ha generalizado la llegada de fertilizantes, agroquímicos y semillas mejoradas que inciden sobre los precios de producción y suponen la imposición de un monopolio de las cadenas tecnológicas por parte de Monsanto y otras multinacionales, hasta el punto que en Colombia el precio de los fertilizantes es de los más altos del mundo. Con todo ello, disminuye el empleo agrícola y se fortalece la agroindustria exportadora, que no produce alimentos, mediante la concesión de baldíos y subsidios a grandes empresas nacionales y extranjeras, como se hace en los Llanos Orientales.

Como complemento y resultado de la crisis agrícola, se impulsa el proyecto de convertir a Colombia en un país minero, lo cual supone utilizar las tierras con otros propósitos distintos a la producción de alimentos, con lo cual se firma el acta de defunción de los campesinos.

Este panorama de corto plazo se expresa en las solicitudes de modificar los TLC, en proteger algunos renglones de la producción agraria y pecuaria, en mejorar la infraestructura de transporte y reducir las tarifas de los combustibles para abaratar los precios internos de los productos.

EL REPERTORIO DE LA PROTESTA

Las múltiples reivindicaciones de los campesinos y la diversidad de sujetos participantes en el paro le dieron desde el principio una renovada actualidad a la cuestión agraria, en un país en donde desde las ciudades se pensaba que los campesinos no existían.

El repertorio de acciones de protesta ha sido muy amplio y variado. Sobresale entre esos repertorios el bloqueo de caminos y carreteras por parte de colonos y campesinos, como procedimiento básico

de movilización, por qué cómo puede hacerse visible un paro agrario, en un país en el cual la información está monopolizada por grandes cadenas que ocultan las protestas sociales. Además, un paro de los campesinos no puede entenderse como dejar de usar los machetes y azadones, algo de lo que nadie se entera, sino como una acción activa con hechos que se muestren fuera de las parcelas.

También se realizaron marchas y movilizaciones hacia los pueblos, cabeceras municipales y ciudades capitales, y como defensa ante la represión se atacaron los símbolos del poder en algunos lugares del país (como en Duitama, Tunja, y otros lugares). Se recurrió a la denuncia por redes de información sobre las acciones criminales del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que dieron a conocer en Colombia y en el exterior la magnitud de la represión. En algunos lugares (Casanare y Cauca), como un método innovador, los campesinos detuvieron a miembros del ESMAD y la policía y los intercambiaron por campesinos que esos cuerpos represivos habían detenido.

El paro concitó la solidaridad de otros sectores sociales (estudiantes, profesores, trabajadores, habitantes urbanos) y también sirvió como catalizador de otras protestas y reivindicaciones, como la de los camioneros, mineros y profesores. Algunos de esos sectores implementaron el repertorio del cacerolazo, de amplia utilización en otros lugares de América Latina.

Llama la atención el nivel de organización de los pobres del campo, que, a pesar de décadas de represión y criminalización, mostraron una enorme vitalidad e iniciativa para nuclear a diferentes sectores agrarios, a pesar de la existencia desde el principio de un triple pliego de peticiones encabezado por tres sectores claramente diferenciados: uno el de las denominadas “dignidades” (arrocera, cafetera, cacaofera y papera); otro el del Coordinador Agrario Nacional (CAN); y un tercero el de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional). Esta diferenciación, que indica la heterogeneidad del mundo agrario, no impidió que se efectuaran acciones coordinadas en todo el país, aunque cada región o sector mantuvo su autonomía, pero sí repercutió en la política divisionista del régimen, que empezó a hablar primero con unos sectores en forma aislada. Además, la movilización no contó con el respaldo de los partidos políticos de izquierda, que intervinieron en forma tardía, y algunos de ellos con objetivos claramente electoreros. Aunque, por supuesto, miembros de la izquierda y politizados sí participaron de manera activa en el movimiento. Esto indica que estamos ante la emergencia de líderes internos, y en gran medida anónimos, surgidos del seno mismo de sus comunidades y con cierto poder de convocatoria.

ESCARNIO Y REPRESION

Desde el principio el régimen no solamente desconoció las razones del paro, sino que procedió, como es habitual en Colombia, a catalogar el movimiento como fruto de la acción de sectores infiltrados (para referirse a las FARC), como una clara muestra de criminalizar a los campesinos y de justificar por anticipado todo el coctel represivo que iba a emplear contra las gentes del campo. Es evidente una primera contradicción en el discurso oficial: si por un lado su locuaz Ministro de Defensa (sic) dice que las FARC están aniquiladas, porque Santos y otros de sus ministros consideran que la insurgencia es la responsable de una protesta de tipo nacional.

Al lado del régimen se situaron los medios de comunicación tradicionales que en un principio decidieron no informar sobre la magnitud que adquiriría la protesta o a calumniarla y señalarla como una manifestación de violencia azuzada por “infiltrados”. Luego, cuando por la magnitud de la protesta, y la difusión informativa en pequeños medios alternativos, los grandes medios se dieron a la tarea de negar las raíces de la protesta y a contraponer en una forma burda –como lo hizo la Revista Semana- la ruana con la capucha, con el fin de presentar una imagen distorsionada en la que se recalca en forma sutil que cualquier protesta termina siempre en violencia, y como tal debe ser rechazada y enfrentada por el régimen.

Ante los bloqueos, las marchas y movilizaciones, el gobierno reprimió brutalmente a los campesinos y dejó en el camino 12 muertos y numerosos heridos y detenidos. Esto en lugar de atemorizar a los labriegos los incentivó a mantener la protesta, la cual se radicalizó en algunos departamentos, como en Boyacá. Cuando la movilización alcanzó una cota máxima el jueves 29 de agosto, y en varias ciudades se presentaron multitudinarias marchas de apoyo, se procedió a reprimirlas con saña y a sabotearlas con la infiltración, esta si de verdad, de provocadores de la policía y miembros de las

BACRIM –como la de los uribeños- para causar pánico y pavor en barrios y pueblos del país, con el fin de liquidar el apoyo que sectores de la clase media urbana le dieron a la protesta.

Solamente después de esa notable movilización, Santos procedió a entablar una mesa de diálogos, con la finalidad de aplacar la protesta, no sin antes anunciar la militarización del país, con 50 mil efectivos del Ejército, como si de una guerra se tratara, una clara advertencia de que se iba a recurrir a la violencia para sacar a los campesinos de las carreteras y caminos. Negociar por separado, una vieja táctica divisionista, se puso otra vez en marcha, lo cual no liquidó la protesta, que se mantuvo en otros lugares del país, con sus propios ritmos y dinámica, aunque en algunos lugares los campesinos desbloquearon las carreteras, ante la amenaza de muerte que pendía sobre ellos, proferida desde la Presidencia de la República.

LOGROS Y RETOS

La movilización campesina no ha sido en vano, y ha dejado importantes enseñanzas para las acciones del futuro inmediato. Mostró que en este país solo la lucha y movilización organizada consigue visibilidad y reconocimiento, como ha lo han demostrado los campesinos de El Catatumbo y más recientemente los del paro agrario nacional. Aunque el régimen no apuesta a implementar las reformas estructurales que se necesitan para democratizar el campo colombiano, se vio obligado a hacer algunas concesiones coyunturales y de corta duración, tales como la promesa a los campesinos de Boyacá de modificar las condiciones en que se importan agroquímicos, eliminar algunos aranceles y crear algunos subsidios. Así mismo, se obtuvo la inyección de capital en el sector agropecuario de un billón de pesos para el año 2014. No obstante, estos son paños de agua tibia, que no remedían de ninguna manera los verdaderos problemas de los campesinos colombianos, y a los cuales ha tenido que recurrir el santismo para atemperar la protesta generalizada, actuando como un apagaincendios.

Un logro estratégico en el imaginario de la lucha consistió en no ceder ante la propaganda de la infiltración –un mecanismo de larga duración por parte del Estado y las clases dominantes- y reivindicar con sus propios intereses como sujetos autónomos, que actúan en forma digna para defender sus propias reivindicaciones. De esta manera se enfrentó el anticomunismo visceral –ahora presentado como antiterrorismo- del que han hecho gala las clases dominantes de este país desde hace décadas, para justificar la represión y desarticulación de la protesta social.

Otro logro de gran importancia radicó en que se desnudaron los verdaderos alcances de los TLC y quedó hecha añicos la propaganda del régimen, de los empresarios y de todos sus áulicos mediáticos sobre los supuestos beneficios de esos acuerdos.

Por supuesto, el hecho que no se hubieran alcanzado las reivindicaciones estratégicas (revisar o derogar los TLC, una reforma agraria, replantear el agronegocio y obligar al Estado a no apoyar a los grandes capitalistas en su política de robo de baldíos) indica que este paro no ha sido el fin de la lucha, sino más bien el comienzo de un ciclo de protestas, en el cual es preciso unificar las demandas, sin que eso signifique renunciar a la autonomía local y regional, al tiempo que se integran diversos sectores sociales y políticos en un programa común de convergencia que enfrente al régimen y a sus proyectos económicos, sociales y políticos y que replantee los asuntos álgidos del libre comercio y de la reestructuración de la propiedad de la tierra, entre otros puntos de carácter estratégico.

[Renán Vega Cantor-Rebelión](#)

EL SALVADOR

EL SALVADOR MIRA A LAS URNAS. BALANCE DEL GOBIERNO FUNES-FMLN ANTE LAS PRESIDENCIALES DE 2014

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó de forma oficial las elecciones presidenciales del 2 de febrero 2014, un reto para el FMLN, que presentará como candidato al actual vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén.

Cuando apenas quedan cinco meses para las elecciones presidenciales salvadoreñas, nos encontramos en un momento propicio para realizar un balance provisional del periodo de gobierno del tándem Mauricio Funes-FMLN (2009-2013) y presentar algunas pinceladas del escenario de campaña antes de los comicios de febrero de 2014.

Funes-FMLN. En primer lugar hay que precisar que el balance es del tándem y no exclusivamente del Frente, ya que quien gana las elecciones de 2009 fue Funes con el apoyo de la maquinaria del FMLN. La exguerrilla salvadoreña, consciente del techo electoral histórico -que oscilaba entre el 30 y el 35% de los sufragios- que no le había permitido ganar unas presidenciales en las dos últimas décadas de régimen postdictatorial, apostó por un candidato externo.

Funes, periodista prestigioso y atractivo para el electorado centrista, la «derecha pragmática» y un sector del empresariado, además de no ser considerado como un «riesgo» por parte de la embajada de EEUU, fue quien otorgó en gran medida ese 20% adicional necesario para la victoria. Quien gana las elecciones, por tanto, no es solo el Frente sino también y fundamentalmente el perfil «amable» de Funes, fuera del imaginario de la sangrienta guerra de los ochenta y expresión de un progresismo «difuso», que públicamente identificó a Lula y a Obama como sus referentes.

La relación de Funes con la dirección del FMLN, desde la asunción presidencial, ha estado signada por un enfrentamiento soterrado pero permanente. Tras la victoria, dos decisiones del nuevo presidente evidenciaron su apuesta por mantener al Frente en segundo plano. Por un lado, no permitiendo que miembros del FMLN formaran parte del anillo presidencial, el cual fue conformado por los denominados «amigos de Mauricio», una combinación de tecnócratas y oportunistas claramente alejados de la izquierda. Por otro lado, en la distribución de las carteras ministeriales, ya que las más estratégicas (económicas y de política exterior) fueron entregadas al citado grupo de «amigos», mientras que los considerados ministerios blandos (temas sociales) sí han podido ser administrados por el Frente.

Tras el golpe de Honduras, la posición de Funes cambió relativamente, ya que el temor generado por la asonada militar le llevó a solicitar a la dirección del Frente mayor apoyo partidario, según afirma Tomás Minero, miembro histórico del FMLN y alcalde de Ciudad Delgado, uno de los municipios más poblados del país. La exguerrilla, por su parte, a lo largo de este quinquenio gubernamental ha arrojado habitualmente al presidente frente a los ataques de la derecha mediática, uno de los principales focos de oposición.

De cualquier manera, la alta popularidad que Funes ha mantenido tampoco le ha permitido al Frente adoptar posiciones muy críticas respecto a su «socio» de gobierno.

¿En qué ha cambiado el país? Indudablemente, el país que se encontró el nuevo Gobierno en 2009 se encontraba en unos parámetros de urgencia social extrema. A la brutalidad represiva del régimen militar de los años ochenta, había que agregarle dos décadas (1989-2009) de neoliberalismo salvaje conducido por una derecha hija de los escuadrones de la muerte.

Edgardo Mira, economista del Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio (CEICOM), asegura que las recetas de los gobiernos de ARENA se sustentaron en la privatización de los activos estratégicos (telefonía, electricidad), la apertura comercial absoluta al capital transnacional, la extranjerización de la banca y el TLC con EEUU.

Las consecuencias de todo esto fueron severas: la aceleración de la emigración salvaje hacia Estados Unidos; la implantación del modelo de las «maquilas», paradigma de la explotación brutal de la clase obrera; y la desestructuración social ampliada, caldo de cultivo para la implantación y el fortalecimiento de las conocidas maras, bandas de criminales con un poder creciente.

Política social. La esfera donde la mayoría de los analistas reconocen que se han producido cambios con el Gobierno de Funes y el FMLN ha sido la política social, en manos precisamente de este último. La implantación de la gratuidad en la educación y los servicios de salud y el control del precio de los medicamentos han sido los logros más destacados, unido a una serie de programas de corte asistencialista -como el vaso de leche escolar- que han ejercido de paliativo en un contexto de extremas necesidades.

En comparación con los ejecutivos derechistas de ARENA, se ha producido un aumento del gasto social, aunque según Edgardo Mira, bajo una orientación poco sostenible, ya que se ha realizado por medio del aumento del endeudamiento, lo cual tiene «limitada viabilidad económica». Las escasas modificaciones en política fiscal explican en gran parte la apuesta por esta alternativa tan riesgosa.

En materia de igualdad de género, El Salvador mantiene en vigencia una de las leyes contra el aborto más restrictivas del mundo, prohibiéndolo en cualquier situación. Sin embargo, la implantación de la iniciativa Ciudad Mujer, liderada por Vanda Pignato, esposa del presidente, ha tenido cierta popularidad gracias a la «promoción de la autonomía económica de las mujeres», atención integral sanitaria y la prevención de la violencia machista.

Economía. Donde no se han producido cambios apreciables ha sido en el terreno económico. Roberto Cañas, quien fuera miembro de la dirección de la guerrilla y de la Comisión negociadora en los noventa, manifiesta que «los pilares del modelo neoliberal no se han tocado».

Para Edgardo Mira, el Gobierno ha impulsado proyectos económicos de clara inspiración neoliberal, destacando el «Asocio para el crecimiento» firmado con el Departamento del Tesoro de EEUU en 2012 y la ley especial de «Asocios público-privados» de 2013, que según el citado economista, es otra vía más de transferencia de dinero público al sector privado capitalista.

La iniciativa más exitosa en términos económicos, desde la perspectiva de los intereses populares, ha sido la creación de la empresa mixta ALBA Petróleos, gracias al apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de Petrocaribe. Una iniciativa que está liderada por diversas alcaldías del FMLN que se asociaron por su cuenta, ya que Mauricio Funes se negó desde el principio a que su Gobierno formara parte del proyecto, en coherencia con su filosofía de preferir compartir cama con Washington en vez de con Caracas. A día de hoy, ALBA Petróleos es una importante fuente de recursos para un buen número de municipalidades controladas por el Frente, además de destacarse por la entrega de becas a estudiantes y el apoyo financiero y tecnológico a campesinos.

Política exterior. En el plano geopolítico, la posición del Gobierno salvadoreño ha sido notablemente conservadora. Roberto Cañas indica que Funes «ha querido ser un aliado estratégico de los gringos», creyendo que así podría proteger a los más de dos millones de salvadoreños (proporción equivalente a aproximadamente un tercio de la población residente en el país en la actualidad) que viven en EEUU. Sin embargo, agrega, no ha podido frenar las deportaciones. El costo ha sido sumamente caro según Cañas: renegar constantemente de Venezuela, enviar tropas a Afganistán y acercarse a amigos tan inefables como Israel, Taiwán y Chile.

En un plano donde el Ejecutivo de Funes sí ha tenido un desempeño notable ha sido en relación con la memoria histórica. Carlos Consalvi, alias «Santiago», quien fuera director de la mítica Radio Venceremos de la guerrilla, nos confiesa que la Secretaría de Cultura está apoyando diversas iniciativas populares para el rescate de la memoria histórica, además del impulso que le están dando en los centros educativos.

Un tanto que se apunta el actual Ejecutivo es el de la importante reducción de la alta tasa de homicidios (de 14 a 5 muertos diarios) producto de la tregua que firmaron las maras tras la mediación gubernamental. Cañas, sin embargo, puntualiza que el éxito es relativo (se circunscribe al enfrentamiento entre bandas) ya que el resto de índices (extorsiones, secuestros, etc), que son los que sufren la mayoría de la población, siguen en porcentajes similares.

Elecciones 2014. Las presidenciales del año que viene se desarrollan en un escenario notablemente distinto a las de 2009. Por un lado, la derecha se presenta dividida, ya que el expresidente (2004-2009) y empresario Tony Saca ha impulsado un nuevo proyecto conservador (UNIDAD), que sin duda restará votos a ARENA. Por otro lado, el FMLN lanza a un candidato de la casa, al histórico miembro de la dirección Salvador Sánchez Cerén (actual vicepresidente), con un carisma limitado pero con una retórica más izquierdista, la cual se concreta en dos ejes: la promesa de incorporarse al ALBA y la apelación al discurso andino ecuatoriano-boliviano del «Vivir Bien» o «Buen Vivir».

Sorprendentemente, el actual presidente Funes no se ha posicionado claramente a favor del candidato del Frente e incluso últimamente ha coqueteado con Tony Saca, lo cual según algunos

analistas locales podría indicar que estaría construyendo una candidatura «independiente» (sin el apoyo del FMLN) para la reelección en 2019. Sea como fuere, su alto índice de popularidad le convierte en un actor central en la campaña, ya que su apoyo a uno u otro candidato puede ser determinante.

Las últimas encuestas sitúan al Frente en primera posición, pero con una diferencia de pocos puntos sobre ARENA, lo cual augura una casi segura segunda vuelta, en las que una derecha probablemente unida complicaría en gran medida la victoria del FMLN.

Fuente: Luismi Uharte. Gara

GUATEMALA

CASO 118/2012: ACOSO Y DERRIBO A LA JUSTICIA

Esta semana pasada se dio una resolución judicial en la Torre de Tribunales que no fue tan conocida ni publicitada como la que en el pasado mayo dictó la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de genocidio que se seguía con Ríos Montt. Pero la sentencia del Tribunal A de Mayor Impacto sobre la muerte de don Andrés Pedro Miguel supone una bofetada mucho mayor a la justicia y puede tener consecuencias aun impredecibles.

La “justicia” en Barillas

El caso de Santa Cruz Barillas ha sido una muestra del uso de la ley por parte de autoridades y empresas para criminalizar la defensa de las comunidades por sus territorios. Como ya dijimos en su momento, el Estado de sitio que se decretó el 1 de mayo de 2012 no se pensó para reponer la calma social amenazada tras el asesinato de Andrés Pedro Miguel; sino para otorgar un escenario para desmovilizar a la población organizada a través del terror y la detención de sus líderes. De hecho, ése fue el único producto efectivo de esos 18 días: nueve personas detenidas y muchas más huidas, escondidas como habían hecho 30 años antes, todas ellas líderes de la resistencia.

Estas detenciones convirtieron a Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velázquez López, Pedro Vicente Nuñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel y Marcos Pedro Miguel en presos políticos, que ha sido una de las formas con que los últimos gobiernos han respondido las movilizaciones y protestas contra las políticas de despojo que se vienen implementando.

Los delitos que se imputaba a estos líderes fueron tan evidentemente contruados y tan improbables, que en los dos casos judiciales puestos en marcha, sendos jueces tuvieron que liberar a los detenidos y terminar diciendo al MP que las pruebas aportadas no permitan probar los delitos por los que se les detuvo. También el Procurador de Derechos Humanos tuvo que llamar la atención a cuatro de los jueces involucrados en los procesos, y el Grupo contra Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció al respecto.

Pero para entonces, estas personas ya habían pasado ocho meses injustamente encarcelados, con violación de todos sus derechos, sufriendo vejámenes y amenazas; mientras sus familias eran hostigadas en Barillas y debían de mantenerse y hacer gastos extras por la situación de los presos. Pese a todo esto, no se ha dicho nada de resarcirles por este tratamiento injusto. Y además, el suplicio no ha terminado para ellos, pues pese a los plazos impuestos, los casos no se han cerrado y estas personas aun viven con miedo de volver a ser detenidos y algunos no han podido recuperar sus trabajos.

Una nueva farsa

Y tenían razón en tener miedo, porque la maquinaria de la represión por la vía legal continuó convirtiendo a los opositores en criminales. El día 27 de agosto, cuando estas personas llegaron a la capital para cerrar el caso por fin, dos de ellos fueron nuevamente detenidos. Dando una vuelta más a la tuerca de la impunidad y forzando una vez más la verdad, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velázquez López fueron acusados de participar en un linchamiento ocurrido en noviembre de 2011.

No importó que casualmente sólo fueran acusados ellos dos, no importó que dijeran –y sus allegados certificaran- que ellos no estuvieron presentes en los hechos. No importó tampoco que en el momento de la audiencia en Santa Eulalia, el 4 de septiembre, la acusación se refiriera a un linchamiento distinto, ocurrido éste en agosto de 2010. De nuevo, todo esto dio igual, la verdad no contaba, y los dos fueron ligados a un proceso preparado ex profeso para ellos. ¿Por qué? Por haber formado parte de la oposición a Hidro Santa Cruz desde su puestos de liderazgo comunitario. Es la única línea que une toda esta historia.

“Indignación, rabia y desconcierto”

El último episodio de esta cadena de burlas a la justicia y la razón, ocurrió este miércoles 11 de septiembre, en el final del caso 118/2012 que el Tribunal A de Mayo Riesgo seguía contra Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares por la muerte de Andrés Pedro Miguel y heridas a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé en Poza Verde el día 1 de mayo de 2012.

En este caso había esperanzas de que se hiciera justicia. A pesar del retraso en hacerlo, las dos personas que todo el mundo en Barillas señalaba como responsables del asesinato, fueron detenidos y presentados el 27 de junio de 2012 por el mismo Ministro de Interior en persona y el Fiscal General, quien recalcó que *“investigará si de parte de la hidroeléctrica se pudo haber dado la orden o los guardias actuaron por su cuenta”*, pues la hipótesis que se maneja por ahora es *“la conflictividad entre la comunidad y la hidroeléctrica Santa Cruz”*. La empresa negó siempre cualquier vinculación con ellos, pero se encontraron pruebas jurídicas de que Ricardo Arturo García López era jefe de seguridad de Hidro Santa Cruz en Barillas.

En la fase de juicio, que se desarrolló durante casi un mes en la Torre de Tribunales, los sobrevivientes y testigos desgranaron sus recuerdos de aquel momento atroz ante los jueces Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos. La defensa mantenía la tesis de la defensa propia ante un ataque de los agredidos, pero se presentaron pruebas que parecían suficientes para mostrar la culpabilidad de los acusados. Incluso en Barillas, el Presidente Otto Pérez había dicho *“el viernes se espera sentencia en el caso del juicio, hay pruebas contundentes y que se dé la sentencia, no queremos impunidad y no importa quien sea, yo estoy para respetar la ley”*.

Por eso, el veredicto no pudo ser más demoledor para los familiares de don Andrés, para Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, y para quienes estaban allá. Sólo se condenaba a 5 años –conmutables-, a Ricardo García López por haber herido a Pablo Antonio Pablo. A pesar de las pruebas de balística, de la coincidencia entre las armas y la bala encontrada en el cuerpo, el Tribunal A de Mayor Riesgo determinó que no se podía demostrar fehacientemente la culpabilidad de ninguno de los dos acusados en la muerte de Andrés Pablo. Por ello, solicita al MP que continúe buscando al responsable. Extraño todo esto ¿no?

Más allá, dándole la vuelta a toda la noción de verdad jurídica, se montaba toda la sentencia sobre la supuesta existencia de un arma en manos de Pablo Antonio Pablo, de la que no hay ninguna prueba ni testimonio, pero que habría provocado la reacción en defensa propia de los acusados.

¿Qué más contar? A pesar de las continuas menciones a lo largo del proceso, y de las pruebas de las vinculaciones laborales, Hidro Santa Cruz no aparece en ningún momento en la sentencia; salvo para una conclusión que se sale totalmente de las atribuciones de un Tribunal: ordenó instituir una mesa de diálogo en Barillas *“entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres líderes comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica en el lugar atendiendo la diversidad y necesidades culturales de la región fijándoles como plazo de tres meses”* (subrayado mío).

Derribo a la verdad

A unos días de tan tremenda burla a la justicia y el sentido común, las cosas se ven peor que antes. Por un lado, y a pesar de ser simple y burda, la estrategia de criminalización de la lucha de Barillas se consolida y se refuerza. Después de la nueva prisión de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, llega el triple salto mortal de la ley: si el Tribunal ha ordenado buscar a un culpable de la muerte de Andrés Pablo, es probable que Pablo Antonio Pablo, víctima de un atentado por ser un luchador por la vida

en Barillas, acabe siendo acusado del asesinato de su paisano, en base a una argumentación sin base, pero que ya quedó asentada en esta sentencia.

Además de Barillas y su lucha, todos los guatemaltecos salimos perdiendo con esa sentencia. La impunidad como arma para la implantación de actividades empresariales recibe un nuevo espaldarazo del sistema. A cambio, el respeto a la justicia y la noción de verdad –sea lo que sea que signifique- se nos escapan cada vez más de las manos. ¿Quién puede llegar a decir lo que pasó aquel día? ¿Se convertirá en verdad la suposición interesada que construyeron Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos? ¿Qué efectos tiene crear una verdad pervirtiendo la autoridad otorgada por la sociedad a quien ejerce de juez?

¿Quién juzga a los jueces? Esta es la pregunta que cada vez se oye más en las calles de Guatemala. Ante comportamientos como el de la Corte de Constitucionalidad en el caso de genocidio, el de Santa Eulalia con Saul y Rogelio, el del Tribunal A de Mayor Riesgo con este caso... ¿Qué se puede hacer? ¿Quién puede poner coto a ese poder absoluto sobre la vida de las gentes y la verdad de los hechos? ¿Cómo se puede acabar con la impunidad judicial?

Pero no queda ahí la cosa ¿Quién informa sobre los informadores? Si se intenta seguir lo narrado acá en la prensa escrita de mayor circulación, sólo se encontrarán retazos parciales de informaciones sesgadas. ¿Es casualidad que en la nota sobre la sentencia en Prensa Libre, Jerson Ramos afirme que “el disparo fue por la espalda”, algo que no se dijo en el tribunal? ¿O será que forma parte de esa verdad que ya se está construyendo respecto a estos hechos? ¿Cómo se puede informar a la sociedad de todo esto si los medios de información son parte y tienen intereses propios en lo que narran?

A quienes estamos siguiendo los hechos alrededor de la oposición comunitaria a las empresas extractivas, no nos queda ninguna duda de que todo esto forma parte de una estrategia de las empresas apoyada por el estado, que no sólo se da en Guatemala, y que ha sido estudiada y sistematizada con el nombre de “criminalización de la lucha social”. Pero somos nosotros los que vamos dejando que ocurra. Si no fuimos capaces de saltar ante el asesinato de dos niños por un sicario, si no somos capaces de defender la noción de Justicia –con mayúscula-, la verdad se nos está yendo de las manos y a cambio, las masacres están volviendo a ser parte de la vida nuestra de cada día.

Fuente: Santiago Bastos. Periodismo Humano

HAITÍ

EL COMBATE AL CÓLERA CHOCA CON LA FALTA DE DINERO EN HAITÍ

La falta de financiamiento para un plan de erradicación del cólera por 10 años significa que, probablemente, esta enfermedad se volverá endémica en Haití en el futuro cercano.

El cólera se propaga a través de alimentos y agua contaminada, así como de la materia fecal. Una de las partes fundamentales del estatal Plan Nacional para la Eliminación del Cólera en Haití, de 2.200 millones de dólares, consiste en financiamiento para los sistemas de saneamiento en todo el país.

La mayoría de los haitianos –alrededor de ocho millones de los 10 millones de habitantes del país- no tienen acceso a sistemas de saneamiento higiénico. Defecan al aire libre, en los campos, los barrancos y las orillas de los ríos. La región de la capital produce cada día unas 900 toneladas de excrementos humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

“Haití es el único país en el mundo cuya cobertura de saneamiento se redujo en la última década”, destacó Rishi Rattan, miembro de Physicians for Haiti (médicos para Haití), organización integrada por profesionales de la salud radicados en Estados Unidos.

“Antes del brote de cólera o del terremoto (del 12 de enero de 2010), la diarrea era la asesina número uno de los niños menores de cinco años, y la segunda causa principal de todas las muertes en Haití”, dijo Rattan a Haiti Grassroots Watch (HGW) por correo electrónico.

“Dado que el cólera es una enfermedad que se origina en el agua y que depende de la falta de acceso al agua limpia, es altamente probable que se vuelva endémica en Haití si entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no financian plenamente el plan de eliminación” de esta enfermedad, añadió.

El cólera, introducido en el país en octubre de 2010 por soldados de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), se propagó rápidamente por todo el territorio. Cada mes se producen casi 3.000 nuevas infecciones. Actualmente afecta a más de 600.000 personas y han muerto casi 8.190 por esta causa.

La mortalidad va en aumento en las áreas rurales, debido en parte a la falta de centros de tratamiento del cólera. En el peor momento de la epidemia había 285. Actualmente, hay apenas 28. Cuando se terminó el financiamiento, la mayoría de las agencias humanitarias abandonaron el país.

Y, lo que es peor, una de las dos grandes plantas de tratamiento de desechos construidas tras el terremoto quedó fuera de servicio en los últimos tiempos.

La conexión cólera-excrementos

Redactado con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el gobierno de Estados Unidos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el plan de eliminación del cólera se centra en los excrementos humanos. Solo el presupuesto de saneamiento llega a 467 millones de dólares.

“Según nuestras cifras, menos de 30 por ciento de la población tiene acceso a lo que podríamos llamar saneamiento básico”, dijo Edwige Petit, jefa de saneamiento en la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento (Dinepa), a HGW.

“En los países vecinos, entre 92 y 98 por ciento tienen saneamiento básico”, agregó.

Según datos de Dinepa, alrededor de la mitad de los hogares rurales y entre 10 y 20 por ciento de los urbanos carecen de acceso a un retrete o letrina adecuados. En Cité Soleil, uno de los grandes barrios hacinados de Puerto Príncipe, algunos usan cualquier terreno abierto para hacer sus necesidades.

“Cuando nuestros hijos tienen que evacuar, los ponemos sobre un pequeño recipiente”, explicó la residente Wisly Bellevue. “Colocamos un poco de agua dentro del mismo. Una vez que terminaron, arrojamos el contenido en un predio vacío”.

Camiones “desfangadores” atienden a grandes instituciones con sistemas sépticos. En 2010 y 2011, por ejemplo, agencias humanitarias vaciaron los miles de retretes portables en los campamentos de refugiados para los 1,3 millones de personas que quedaron sin hogar tras el terremoto.

Quienes no pueden pagar ese servicio a menudo contratan uno más económico: los hombres llamados “bayakou” en Haití, que vacían letrinas y sistemas sépticos a mano. Trabajan por las noches y la mayoría vierte su carga en ríos, canales y barrancos.

Antes de la epidemia de cólera, incluso los camiones usados para arrojar las heces se mezclaban con la orina en los barrancos que drenan en el mar Caribe.

Avances y desafíos

Desde 2010, Dinepa y sus socios han logrado avances considerables en materia de saneamiento.

Con la ayuda del gobierno español, Unicef y otros, Dinepa construyó dos centros de tratamiento para la región de la capital, y espera erigir otros 22 por un presupuesto total de 159 millones de dólares.

Sin embargo, hasta ahora solo se empezó a construir uno cerca de St. Marc, otro en Les Cayes, en el sur, y un tercero en Limonade, en el norte.

La imponente planta de tratamiento de desechos de Morne à Cabri, que costó unos 2,5 millones de dólares y se inauguró en septiembre de 2011, “tiene la capacidad de tratar 500 metros cúbicos de excrementos por día, equivalentes a lo que producen 500.000”, según Dinepa.

Pero ya hay un problema. Actualmente, el centro está clausurado. Los portones están cerrados. Un motivo es la falta de financiamiento. Las tarifas que pagan las empresas de transporte de excrementos no generan suficientes ganancias.

También, después de que las agencias humanitarias dejaron de administrar los campamentos de refugiados –se retiraron apenas se terminó el financiamiento- y las entregas de retretes portables se volvieron problemáticas.

“Pasamos de tener desechos de letrinas constituidos por entre 10 y 20 por ciento de basura, a tener entre 70 y 80 por ciento”, explicó Petit.

“La planta de tratamiento no se construyó para manejar basura, sino agua y materia fecal. Los estanques colapsaron, obstruidos por la basura”, añadió.

Aunque se esfuerza por subsistir financieramente, Dinepa está determinada a hacer que las cosas vuelvan a funcionar.

“Vamos a usar equipos del gobierno. Si podemos obtener 40.000 o 50.000 dólares, podremos limpiarlo”, dijo.

Por supuesto, la otra planta de tratamiento funciona, pero persisten dos desafíos: convencer a los bayakou y a otros que entreguen sus cargas, y el asunto del financiamiento. Porque, aunque se entreguen los excrementos, los bayakou no podrán pagar.

Otra parte del plan es una campaña educativa que busca combatir “las malas prácticas de defecación e higiene”. Según Petit, muchas familias rurales ya ni siquiera se molestan en construir letrinas.

“En los últimos 30 años se desarrolló una cierta mentalidad según la cual la gente sabe que es bastante posible que alguien más (como una agencia extranjera) le dé retretes”, explicó Petit.

Pero en vez de repartir retretes y letrinas gratuitas, Dinepa espera crear un fondo de 120 millones de dólares que permita a las familias pedir prestado el dinero necesario para hacer sus propias construcciones.

El plan anticólera, ¿un disparate?

Muchos aspectos del plan de erradicación del cólera están en suspenso. Haití requiere 2.200 millones de dólares, y un plan para la vecina República Dominicana necesita 77 millones de dólares adicionales. Para los años 2013 y 2014 solamente, Haití necesita 443,7 millones de dólares.

El Banco Mundial, la OPS y Unicef prometieron en los últimos tiempos 29 millones de dólares, y otras agencias de la ONU ofrecieron apenas otros 2,5 millones. Pero lo recabado hasta ahora es menos de la mitad de lo que se requiere.

El presupuesto 2012-2013 de la Minustah es de 638 millones de dólares, alrededor de 200 millones más que lo que necesitan Haití y la República Dominicana para los primeros dos años de sus planes de eliminación del cólera.

Fuente: Haiti Grassroots Watch/IPS

HONDURAS

¡DEFENDAMOS LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA!

“El camino de la vida puede ser libre y bello; pero hemos perdido el camino. La avaricia ha envenenado las almas de los hombres, ha levantado en el mundo barricadas de odio, nos ha llevado a la miseria y a la matanza...El odio de los hombres pasará y los dictadores morirán, y el poder que arrebataron al pueblo volverá al pueblo...” Charlie Chaplin, 1940.

El poder vertical, autoritario, clasista y patriarcal se refleja en la pedagogía del terror y el crimen. Los cuerpos represivos militares y policiales hondureños son instrumentos del uso y abuso de la violencia por parte del estado oligárquico, capitalista dependiente articulado al capital financiero

internacional responsable de la guerra, enfermedad y muerte programada por el modelo extractivo minero y las políticas de las energías sucias y agrocombustibles de la globalización neoliberal.

La dirigente lenca Berta Cáceres, Coordinadora General Del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), perseguida, amenazada a muerte, privada de su libertad por defender el derecho legítimo y legal de los territorios indígenas, ha sido el objetivo militar, represivo y jurídico del sistema coercitivo del Estado.

En contraste con lo anterior los funcionarios que han dado las órdenes de militarizar, aterrorizar la vida de las comunidades indígenas y campesinas han sido promovidos a altos cargos del poder público mientras la violación de los derechos y el asesinato de dirigentes permanece en la totalidad impunidad.

La persecución, intimidación y terror contra las y los defensores de los territorios ancestrales, de los pueblos indígenas, misquitos, garífunas y de familias campesinas por los guardias privados, sicarios de las multinacionales mineras, petroleras, represas y otras empresas generadoras energías sucias constituyen una práctica cotidiana.

En igual forma se ha amenazado la vida de los otros dirigentes del COPINH Aureliano Molina, Tomas Membreño Gómez y de los abogados Víctor Fernández y Martín Fernández del Movimiento Amplio por la Libertad y la Justicia defensores de Berta Cáceres y de la comunidad de Nueva Esperanza que lucha contra la explotación minera.

En igual forma existen amenazas a la vida y cárcel para la dirigente campesina de la CNTC Magdalena Morales por luchar contra el despojo de las tierras de familias campesinas por la Empresa Azucarera ASUNOZA subsidiaria de la multinacional Cervecera MILLER.

Demandamos solidaridad internacional, libertad y respeto a las vidas de Berta Cáceres, Tomás Membreño Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández, Martín Fernández y Magdalena Morales y respeto a los derechos de los pueblos lenca garífunas y misquitos asaltados por las empresas mineras, hidroeléctricas, agrocombustibles eólicas y petroleras

Tomado de <http://alainet.org/>

MÉXICO

LA RECONFIGURACIÓN DEL AUTORITARISMO Y EL CONFLICTO MAGISTERIAL

Las protestas y movilizaciones de los maestros en buena parte del país han demostrado que las reformas impulsadas por Peña Nieto están generando un enorme descontento entre buena parte de la población, poniendo a prueba al sistema político. El regreso del PRI a Los Pinos reconfiguró la dinámica política, regresándola a los tiempos en que el poder ejecutivo subordinaba sin miramientos a los otros dos poderes así como a los gobernadores y en general, a todos los actores políticos institucionales. En los viejos tiempos, el PRI controlaba el congreso marginando a la oposición partidista; hoy el control se da por medio de pactos, como el pacto por México, en el cual la oposición se subordina al proyecto presidencial pero manteniendo una imagen de pluralidad, muy útil para legitimar el desmantelamiento del viejo estado de bienestar y mostrarlo como un avance en el desarrollo político del país.

La embestida contra el magisterio para reducir sus derechos laborales evidencian tres procesos que apuntan a reconfigurar el autoritarismo "democrático" en México, a saber: las soluciones policiacas y militares para la contención del descontento, el crecimiento de la brecha entre gobernantes y gobernados y el mantenimiento del charrismo sindical como fórmula para mantener el control sobre los trabajadores organizados.

El autoritarismo estuvo siempre apuntalado en las fuerzas armadas pero en nuestros días se puede apreciar un cambio cualitativo. En los viejos tiempos, el ejército permanecía en los cuarteles y seguía siendo visto por los políticos como una amenaza a su poder -herencia de los conflictos posteriores al fin de la revolución de 1910 que provocó gran inestabilidad política y social, como consecuencia de las continuas rebeliones y asonadas militares- mientras que hoy han salido de sus cuarteles y los

gobernantes dependen cada vez más de ellos. El reciente desfile para conmemorar la independencia nacional tuvo un actor privilegiado: el ejército, que desfiló, disfrazó efectivos de civiles para medio llenar el zócalo y además, coordinó las labores de represión en todo el país. Las fiestas nacionales han perdido poco a poco su carácter civil y la parafernalia militar gana terreno. La participación del ejército como prólogo a un encuentro de fútbol de la selección nacional es otra muestra clara del militarismo rampante.

Al mismo tiempo, y en estrecha relación con la anterior, los gobernantes muestran sistemáticamente su desprecio por las demandas de las mayorías, confiados en su alianza con las fuerzas armadas, en los enormes recursos económicos que perciben y en los aplausos (¿sobornos?) que reciben de los organismos internacionales, la banca internacional y los gobiernos de los países ricos. El conflicto magisterial ha sido objeto de toda clase de descalificaciones y trampas burdas por parte de los políticos y sus partidos. Arrojados por los medios de comunicación, diputados, senadores, gobernadores, ediles y empresarios insisten en que no hay otra ruta que la suya y lo que se espera de la población es su apoyo en lugar de protestas y movilizaciones. Su desprecio por las leyes y la dignidad de las personas parece no tener límites. Las recientes inundaciones que le han costado la vida a cientos y el patrimonio a decenas de miles son un escaparate privilegiado para confirmar el argumento. En lugar de actuar para minimizar los daños, la burocracia política estaba más preocupada por los festejos patrios y la represión de las protestas.

Por su parte, el charrismo sindical representa hoy una vieja fórmula política, reciclada por el estado para mantener el control sobre sus trabajadores y los de las empresas privadas. La burocracia sindical fue por mucho tiempo un actor político central en el equilibrio del sistema político tradicional pero su declive (que probablemente inició con la muerte de Fidel Velázquez, el charro mayor y sobre todo con el cambio en el modelo económico) no se ha detenido en las últimas décadas. El conflicto magisterial ha debilitado enormemente el férreo control del SNTE sobre los maestros del país. Se podría pensar que el estado ha dejado a su suerte al sindicato de maestros para fragmentar la representación sindical en aras de un mayor control. El encarcelamiento de su líder histórica, Elba Esther Gordillo, puede entenderse hoy como parte de la ofensiva y antecedente directo de la reforma. Muchos de sus miembros se preguntan si las reformas hubieran pasado en el caso de que la maestra estuviese libre y en control del sindicato. Sin embargo, el estado no pretende renunciar a su control sino reforzarlo, debilitando y fragmentando a las organizaciones de trabajadores.

Por todo lo anterior, las luchas de los maestros resultan fundamentales para contener la reconfiguración del sistema político. En la medida en que las demandas magisteriales se trasladen a la defensa y democratización de sus sindicatos, sin menospreciar las demandas originales, la reconfiguración del autoritarismo -sostenida por la democracia electoral y la militarización- enfrentará obstáculos eventualmente infranqueables. La recuperación de las organizaciones sindicales -condición necesaria para recuperar sus derechos perdidos con las reformas- representa hoy un elemento indispensable para abrir nuevos horizontes a la historia de México e impedir el afianzamiento del autoritarismo "democrático". Tal vez por eso estudiantes, desempleados, amas de casa, padres y madres de familia y la población en general los han apoyado. Presienten que lo que hay en juego va más allá que la defensa de los derechos laborales del magisterio. Y en eso tienen toda la razón.

Informa: Rafael de la Garza Talavera en Rebelión

NICARAGUA

ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA PADRE TEO KLOMBERG

Nicaragua está cambiando. América está cambiando. Europa y los pueblos del estado español están cambiando. La esperanza orienta el futuro de las luchas y resistencias de uno y otro lado del atlántico y necesitamos que la solidaridad internacionalista que siempre había acompañado nuestros pueblos regrese para quedarse. La lucha también educa y hoy, más que nunca, Nicaragua y la América Bolivariana son una extraordinaria fuente de enseñanzas. El bagaje acumulado por el FSLN

y la lucha del pueblo nicaragüense es inmenso y hoy como ayer de una utilidad estratégica incontestable. Necesitamos pues:

1.- Reactivar y redefinir la solidaridad europea con la RPS y con el FSLN en el marco de un estrechamiento de las relaciones con el pueblo de Nicaragua.

2.- Coordinar la información y las acciones de la solidaridad europea con Nicaragua y los pueblos del ALBA en el contexto de un mundo global y un intenso proceso de integración latinoamericana.

Por todo ello, **hacemos pues un llamado a las organizaciones europeas de solidaridad con Nicaragua para que se hagan presentes en este encuentro** y participen activamente para unificar criterios en relación a sus objetivos y propuestas de futuro.

OBJETIVOS POLÍTICOS DEL ENCUENTRO

1) **reactivar las organizaciones europeas solidarias con la RPS y los Comités de Liderazgo Sandinista en Europa** fortaleciendo las relaciones mutuas, la información, las acciones concretas y la coordinación con otras redes solidarias con los pueblos de América.

2) **analizar, debatir y redefinir la solidad europea con la RPS y el papel del FSLN** invitando a partidos políticos, sindicatos, movimientos, redes y colectivos interesados.

3) **acordar una agenda común de acciones** en forma de campaña europea de solidaridad política con la RPS priorizando cuatro ámbitos de trabajo:

- **continental**: se trata de ampliar nuestra mirada y hacerla más continental; partir de Nicaragua pero centrarla en la Revolución Bolivariana de Venezuela y el ALBA y los procesos progresistas que se viven en América Latina y el Caribe.

- **mediático**: que de respuesta a la hostilidad mediática contra Nicaragua, el FSLN y los procesos revolucionarios y progresistas de América.

- **partidario**: que concrete qué quiere y qué puede hacer el FSLN para mejorar lo que nosotros queremos y podemos hacer en solidaridad con la Revolución Sandinista, y

- **municipalista**: cómo activar y coordinar la cooperación y solidaridad de los hermanamientos municipales europeos con los municipios nicaragüenses.

El Encuentro se celebrará en Arbúcies (Cataluña – Estado Español) los días 11, 12 y 13 de octubre de 2013.

Solicitar más información en: encuentroeuropeorpsnicaragua@gmail.com

PANAMÁ

EL EFECTO ESPEJO EN PANAMÁ

Escribió Martin Gardner, el prestigioso filósofo de la ciencia, a propósito de Alicia a través del espejo, la obra de Lewis Carroll: “en un espejo...todos los objetos asimétricos van en dirección contraria”. Alicia contempla el mundo de los adultos desde una inversión de la realidad y así logra tolerarlo. La contemplación del mundo al revés, en la ficción de Carroll, es un elemento fantástico que permite posibilidades al personaje. Por otra parte, Eduardo Galeano, en su libro Patas arriba, la escuela del mundo al revés, dice con magistral ironía: “Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana”.

En la actualidad, en Panamá estamos viviendo el efecto del espejo de Alicia, con la única diferencia que no necesitamos atravesar como ella el espejo. Nuestra realidad es como una novela surrealista, con más elementos de corte fantástico que realistas. Los panameños también tenemos nuestro pequeño mundo al revés, sin la necesidad de espejos, armarios o agujeros mágicos que nos transporten a otro mundo, basta con observar la cotidianidad. Paisano panameño, camarada panameño, te invito a asomarte a la ventana y dar un vistazo.

En el mundo al revés panameño no necesitamos prisiones, porque la escuela, las instituciones, el barrio y el hogar son nuestras cárceles. En la escuela los estudiantes están presos en sus cuerpos y por un sistema autoritario; los servidores públicos laboran presos del miedo; los jóvenes están presos por la violencia en sus propias calles del barrio; y la familia está presa de la mediocridad de la TV y la batalla por el rating.

En el mundo al revés panameño no se rinde tributo a Victoriano Lorenzo, ni a Bayano ni a Cémaco, pero se honra al “conquistador torvo”, en buenas palabras de Neruda, o a imágenes hieráticas, incluso a super estrellas de la farándula. En nuestro mundo al revés no necesitamos bibliotecas, ni museos ni cuenta-cuentos porque aquí la memoria, la identidad y la cultura no se come, ni se vende, es decir, no sirve para nada.

En el mundo al revés panameño no existen los pobres, ni los empleados mal pagados, ni el subempleo, porque, ya se sabe, somos el país más rico de la región. No se atreva usted a decir que vio a un pobre, porque todos somos ricos. Aquí un paquetito de café, una micha de pan o un huevo no están caros y es por eso que nuestros niños van bien desayunados a la escuela y son superdotados, algunos, incluso hablan varias lenguas.

En este país de los espejos todos somos muy felices; si no lo cree mire la fiesta que formamos todas las madrugadas para corretear un pirata o un metro bus que nos lleve al trabajo... es que somos tan felices, por eso de regreso a casa venimos soñando mientras dormimos, no es que estemos cansados, no. En el mundo al revés panameño los que roban miles de dólares o hectáreas de tierras o los que incendian muchachos recluidos no van a la cárcel; pero el que roba un mafa o una gallina va a la prisión con o sin condena y su rostro sale en la prensa, porque a este hereje del demonio hay que conocerlo para masacrarlo, joderlo, humillarlo y olvidarlo.

En el mundo al revés panameño no te mata el Aedes aegypti, ni una gripe mal cuidada, ni los diablos rojos (ya no); aquí te matan los hospitales, las medicinas, la tardanza, la negligencia, los sicarios y la basura; hay veces que te matan desde la cuna para que no crezcas y te conviertas en escritor o cuenta cuentos. En el mundo al revés panameño no se tiene miedo a la tulvieja, ni a la silampa, ni a los duendes, ni al chivato; aquí se tiene miedo a la policía, al político corrupto y al jefe o jefa de la oficina de recursos humanos.

Paisano panameño, camarada panameño he aquí tu Panamá al revés. La mala noticia es que no estamos en un cuento como Alicia; la buena es que podemos imaginarlo al derecho como debería ser. Pero para eso tienes que asomarte a la ventana y decidir si quieres cambiar tu realidad o dejarla como está.

Informa: Carlos Fong en Otramérica